

La lucha contra la apatridia: una perspectiva gubernamental

Nicole Green y Todd Pierce

El gobierno de EE.UU. opina que la prevención de la apatridia y la protección de los apátridas debe ser una prioridad para todos los gobiernos.

La apatridia es el trasfondo de muchos problemas. Con mucha frecuencia impide que los niños reciban una educación y que sus padres trabajen legalmente; hace que las personas sean vulnerables a la explotación laboral y sexual, la trata, el arresto y la detención arbitrarios, la discriminación y otros abusos; y deniega a las familias el acceso a la

Birmania o los refugiados palestinos para constatar algunas de las consecuencias más terribles de la apatridia.

El ciudadano debe su lealtad a un Estado soberano y tiene derecho a que éste lo proteja. La ciudadanía permite establecer la identidad de las personas y de ella se desprende el fundamento de la dignidad

El problema de la apatridia no es nuevo, sino que ha estado “en la sombra”, al igual que los apátridas. Apenas se dispone de datos sobre la historia de la apatridia o de tendencias demográficas relacionadas. Las cuestiones de la ciudadanía y la nacionalidad (todas ellas vinculadas con la inmigración) pueden ser delicadas desde el punto de vista político. En los peores contextos, los gobiernos despojan a sus ciudadanos de la nacionalidad por motivos políticos, en algunos casos, sencillamente carecen de la capacidad para reconocer a sus ciudadanos de forma oficial y dispensarles documentos acreditativos y, en otros, la apatridia es consecuencia de una discriminación sistemática o de la existencia de lagunas en la legislación y en los procedimientos sobre ciudadanía. Por ejemplo, las leyes sobre ciudadanía del régimen birmano excluyen explícitamente a los rohingya y tras la muerte de varios migrantes rohingya en el mar en febrero de 2009, el régimen reiteró su postura de que ese colectivo no se encuentra entre las “razas nacionales de Birmania” oficiales.

El gobierno de EE.UU. se preocupa por la apatridia, ya que este fenómeno repercute en la estabilidad regional y en el desarrollo económico. Los diplomáticos estadounidenses actúan en pro de la prevención y resolución de situaciones de apatridia en su territorio. En Vietnam, por ejemplo, los diplomáticos estadounidenses animan al gobierno a naturalizar a casi 10.000 apátridas que habían huido de los jermes rojos de Camboya a finales de los años setenta. En 2007, el Departamento de Estado creó un apartado distinto dedicado a la apatridia en los informes por países que presenta al Congreso cada año sobre las prácticas de los derechos humanos. Los recién publicados informes para 2008 también han incluido dicho apartado con la intención de concienciar a la sociedad sobre la existencia de poblaciones apátridas, los desafíos a los que éstas se enfrentan y los avances logrados en la solución de los casos de apatridia.

A través de la diplomacia y la asistencia humanitaria, el Departamento de Estado de EE.UU. ha procurado hacer de la apatridia una cuestión prioritaria en la agenda nacional de política exterior.

atención sanitaria y les impide casarse, poseer bienes, abrir cuentas bancarias y viajar. Cuando los apátridas se desplazan, la cuestión de a qué Estado pertenecen es vital. Basta con fijarnos en la situación de los rohingya de

humana. Por el contrario, la apatridia o la falta de ciudadanía suele denegar a las personas el ejercicio de sus derechos humanos, obstaculiza la satisfacción de sus necesidades básicas y les impide participar plenamente en la sociedad.

La comunidad de hablantes de urdu de Mirpur en Dacca (Bangladesh) no disfruta de una vivienda digna; familias de entre 6 y 8 miembros se alojan y trabajan en una misma habitación. Tanto los hombres como las mujeres trabajan durante muchas horas, ellos tejen saris en una fábrica y ellas bordan en casa.



US Department of State

EE.UU. está decidido a continuar apoyando a las poblaciones apátridas y es el mayor donante de ACNUR, la agencia internacional que tiene el mandato de proteger a los apátridas.¹

En general, la legislación estadounidense es coherente con los objetivos y los principios de las dos convenciones² que abordan el problema: es decir, EE.UU. no contribuye a agravar la apatridia y sus leyes no tratan a los apátridas de forma diferente a otros extranjeros. Sin embargo, EE.UU. no es parte de esos instrumentos jurídicos internacionales porque contienen obligaciones específicas que son incompatibles con el derecho nacional. Por ejemplo, la Convención de 1961 prohíbe renunciar a la ciudadanía si ese hecho diera lugar a la apatridia; esta prohibición legal de la Convención entra en conflicto con la legislación estadounidense que reconoce, desde hace mucho tiempo, el derecho de los estadounidenses a renunciar a su nacionalidad, incluso si al hacerlo se convierten en apátridas.

No obstante, aunque no se han firmado ambas convenciones, manifestamos estar totalmente comprometidos con sus objetivos; no ser parte de ellas no merma nuestro compromiso en modo alguno.

Efectivamente, EE.UU. fomenta los objetivos políticos de las convenciones y anima a otros gobiernos a sumarse a los esfuerzos bilaterales y multilaterales para evitar que las personas se conviertan en apátridas, identificar a los que lo son y protegerlos de la explotación, la discriminación y otros abusos, además de buscar soluciones, como la naturalización, el registro de nacimientos, el reasentamiento y otras medidas que aumenten las posibilidades de obtener la ciudadanía.

Ya sea porque se les excluya deliberadamente o porque no hayan llegado a entrar en el sistema legal o administrativo, se ha descrito a los apátridas como “fantasmas legales”³. Es un placer para el gobierno de EE.UU.

respaldar la presente edición de Revista Migraciones Forzadas, que supone un esfuerzo considerable por reconocer a esas personas, dotar de voz a sus historias, crear mayor concienciación sobre las causas y las consecuencias de su condición y animar a la comunidad internacional a encontrar soluciones a su terrible situación.

Nicole W. Green (GreenNW@state.gov) es Funcionaria del Programa y Todd Pierce (PierceTJN@state.gov) es Asesor de Relaciones Públicas de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (<http://www.state.gov/g/prml/>) del Departamento de Estado de EE.UU.

1. En el año 2008 EE.UU. aportó más de 500 millones de dólares a ACNUR. Una parte de ellos se destinó al presupuesto básico de la agencia para respaldar las actividades de protección y asistencia a las poblaciones apátridas.

2. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954), Convención para reducir los casos de apatridia (1961)

3. ACNUR The World's Stateless People: Questions & Answers (Los apátridas del mundo: preguntas y respuestas), septiembre de 2007, p. 5. Disponible (en inglés) en: <http://www.ACNUr.org/refworld/docid/47a707900.html>

Sin lugar adonde ir: ser apátrida en Israel

Oded Feller

Hasta hace unos años Israel no reconocía la existencia de apátridas en su territorio. Sin embargo, este reciente reconocimiento no ha motivado que el Estado se haga cargo de su situación precaria ni que les ofrezca soluciones adecuadas.

La legislación israelí otorga a los judíos autorización preferente y casi exclusiva para entrar en el país. El Ministro del Interior tiene muy poca autoridad para impedir que entren en el país aquellas personas que cumplen con los requisitos estipulados. Por otro lado, la ley adjudica a dicho Ministro una potestad casi ilimitada para conceder visados de entrada a todo aquel que no sea judío y no establece los criterios de concesión y denegación de los mismos. En la práctica, son contados los casos en que los ciudadanos extranjeros consiguen adquirir la residencia permanente en Israel con la autorización del Ministerio.

El resultado es una política de inmigración que vulnera los derechos humanos en general y, especialmente, el derecho a no ser discriminado por motivos de raza. Estos rígidos principios también

subyacen tras la postura que adopta Israel ante los apátridas no judíos.¹

Según la legislación israelí, los apátridas residen ilegalmente en su Estado. Corren el riesgo de ser detenidos y encarcelados por ser residentes ilegales; no tienen derecho a trabajar, ya que su situación es irregular; no pueden acceder a la sanidad pública ni a los servicios sociales; no disponen de documentos de identidad y, por tanto, no pueden conducir ni abrir cuentas bancarias y, además, tienen dificultades para contraer matrimonio; si abandonan el país, no pueden regresar a él. En la actualidad hay entre unos centenares y unos millares de apátridas que viven en Israel.

Los inmigrantes que perdieron su nacionalidad anterior

En una ocasión se detuvo y encarceló como residentes ilegales a tres personas

que tenían la ciudadanía de la antigua Unión Soviética pero que no habían adquirido la de ninguno de los Estados que se crearon tras su desaparición. Se les liberó unos meses después, cuando las autoridades constataron la imposibilidad de deportarlos a algún país. Permanecieron en Israel sin estatus legal alguno. En su respuesta a la solicitud de residencia permanente, el Ministerio del Interior israelí declaró que la condición de apátrida no constituía un principio humanitario que obligara al Estado a conceder un estatuto jurídico a alguien.

Posteriormente, el Tribunal de Asuntos Administrativos dictaminó que el Ministerio del Interior debía animar a los apátridas a solicitar ante él la formalización de su situación antes de ser detenidos, ya que la detención no tenía sentido (era imposible deportarlos, en cualquier caso). El Tribunal obligó al Ministerio a establecer un procedimiento para resolver los casos de apatridia -mediante el cual los apátridas recibirían permisos de residencia temporales- y a